
COLOMBIA - Nivel 1

Colombia es un país fuente de mujeres y menores de edad sujetas a la explotación sexual alrededor del mundo, particularmente en América Latina, el Caribe, Asia y Europa occidental, así como país fuente, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños y niñas, objeto de trabajo forzado. Dentro del país, las víctimas Colombianas son encontradas en condiciones de trabajo forzado en los sectores de la minería, agricultura, y servidumbre doméstica, y la explotación sexual de mujeres Colombianas y niñas continua siendo un problema importante. Grupos en alto riesgo de ser víctimas de trata interna incluyen personas desplazadas, Afro - Colombianos, comunidades indígenas, y familiares de miembros de organizaciones criminales. Menores de edad ecuatorianos han sido objeto de trabajo forzado y de explotación sexual en Colombia, y menores de edad colombianos son explotados en la modalidad de mendicidad ajena en áreas urbanas. Los grupos armados ilegales reclutan a menores de edad por la fuerza y los obligan a unirse a sus filas como combatientes, para cultivar narcóticos ilegales, o para ser explotados en prostitución. Miembros de bandas y redes de organizaciones criminales obligan a colombianos vulnerables, incluyendo personas desplazadas, a la explotación sexual y trabajo forzoso, particularmente en la venta y transporte de narcóticos ilegales. Colombia es país de destino para el turismo sexual infantil de extranjeros, provenientes de Estados Unidos, Europa y otros países de Suramérica.

El Gobierno de Colombia cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Las autoridades continúan llevando a cabo campañas de sensibilización y esfuerzos para la aplicación de la ley, la judicialización

de los casos de trata sexual transnacional y la apertura de un importante número de investigaciones. A las víctimas identificadas de trata se les suministró apoyo por parte del gobierno, incluyendo servicios de repatriación, en cooperación con organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el gobierno no reportó condenas en contra de posibles infractores de casos de trabajo forzado. El decreto pendiente de protección de víctimas de trata, requerido por la ley contra la trata de 2005, no fue promulgado durante el período que se examina, lo que impide un plan de protección de víctimas más robusto, aunque el gobierno continuó proporcionando financiación limitada a organizaciones de la sociedad civil que brindan algunos servicios a las víctimas. Las autoridades reportaron identificar cinco víctimas de trabajo forzado y una víctima de trata interna durante el año, y fue difícil evaluar los esfuerzos del gobierno para asistir víctimas de explotación sexual dentro del país, ya que parece ser que la mayoría de víctimas de explotación sexual internas no fueron identificadas como tal.

Recomendaciones para Colombia: Promulgar el decreto de asistencia a las víctimas y designar fondos para su implementación; asegurarse que todas las víctimas cuenten con acceso a protección y servicios especializados, mediante el aumento de fondos destinados a refugios y a asistencia de reintegración; incrementar los esfuerzos para proactivamente identificar, investigar y judicializar casos de trabajo forzado y de explotación sexual interna, en parte a través del mejoramiento de la coordinación entre inspectores laborales, policía y trabajadores sociales; continuar con la judicialización de casos de explotación sexual transnacional; crear mecanismos formales para identificar víctimas de trata dentro de poblaciones vulnerables dentro del país, incluyendo colombianos desplazados, e implementar esas medidas; y fortalecer la capacidad del grupo interinstitucional anti- trata para recopilar datos

precisos sobre todas las formas de trata y coordinar los esfuerzos nacionales contra la trata en asocio con la sociedad civil

Judicialización

El gobierno de Colombia llevó a cabo esfuerzos para aplicar la ley en los casos de explotación sexual durante el año, pero los esfuerzos en contra del trabajo forzado fueron inadecuados. La ley colombiana prohíbe todas las formas de trata y contempla penas de entre 13 y 23 años de prisión, más multas, las cuales son suficientemente severas y proporcionales a las penas previstas para otros delitos graves, como la violación sexual. Mientras que la ley colombiana penaliza todas las formas de trata de personas, las estructuras gubernamentales no lograron reflejar este enfoque integral. Al igual que en años anteriores, un fiscal especializado maneja todos los casos de trata transnacional y se enfrentó a una carga de trabajo significativa. No hubo fiscales especializados para supervisar los casos de trata interna. En cambio, los casos internos de trata fueron investigados por fiscales locales, incluyendo de unidades de delitos sexuales, algunas de ellos teniendo sólo experiencia limitada. Como resultado de ello, los casos de trata sexual infantil interna a menudo se investigaron solo como explotación sexual comercial de menores de edad. Las autoridades informaron que los esfuerzos para investigar los casos de trata estaban limitados por la falta de recursos específicos. La Corte Constitucional emitió un fallo dirigido a las entidades del gobierno para incrementar los esfuerzos contra el trabajo forzado y la servidumbre doméstica. Las autoridades operaron un centro interinstitucional cuyo objetivo era coordinar y hacerle seguimiento a las investigaciones y procesos penales, recopilar estadísticas a nivel nacional sobre los delitos de trata, y remitir a las víctimas a los proveedores de servicios de protección. La recolección de datos sigue siendo desigual y se centró

casi exclusivamente en los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata transnacional.

En el 2012, las autoridades colombianas reportaron 128 nuevas investigaciones de trata; la mayoría de los casos involucró mujeres en prostitución forzada en el exterior, con dos investigaciones reportadas de presuntos delitos de trabajo forzado. Las autoridades reportaron que iniciaron 18 procesos judiciales relacionados con trata y la condena de 10 personas por el delito de tráfico sexual transnacional en 2012. Las penas oscilaron entre seis a 10 años de prisión, con al menos un tratante condenado a cumplir su sentencia en la modalidad de arresto domiciliario, así como a pagar multas. En comparación, en 2011, las autoridades condenaron a 16 infractores de trata sexual transnacional y no lograron ninguna condena por trata interna. Por segundo año consecutivo no hubo reportes de condenas relacionadas con la comisión de delitos de trabajo forzado. En marzo de 2013, la Corte Constitucional ordenó a los miembros de una familia que mantuvieron a una menor de edad en servidumbre doméstica de 1963 a 1975 a pagar a la víctima una indemnización por los daños físicos y psicológicos. En 2012, las autoridades llevaron a cabo tres investigaciones por el delito de trata transnacional, de manera conjunta con otros gobiernos.

A través de alianzas con dos organizaciones internacionales, cientos de fiscales, funcionarios judiciales, policías y otros funcionarios del gobierno recibieron capacitación durante el año sobre la manera de investigar los casos de trata y de identificar a las víctimas. El gobierno no informó de investigaciones, judicializaciones o condenas en contra de funcionarios públicos, por delitos relacionados con la trata de personas.

Protección

El gobierno de Colombia proporcionó algunos servicios a las víctimas de trata, pero la falta de promulgar el decreto de protección de las víctimas, que requiere la ley contra la trata de 2005, continuó obstaculizando el aumento de los esfuerzos de protección. Sin embargo, durante el año, las autoridades proporcionaron fondos para que una organización no gubernamental abriera un refugio de emergencia para víctimas adultas de trata. El gobierno no empleó procedimientos formales para identificar víctimas de trata dentro de poblaciones vulnerables en el país, tales como personas desplazadas, o personas ejerciendo la prostitución. El grupo interinstitucional de lucha contra la trata informó la identificación de 38 víctimas de trata en 2012, sólo cinco de ellas fueron casos sometidos a trabajo forzado, y sólo uno fue objeto de trata interna; la mayoría de estas víctimas fueron mujeres colombianas objeto de prostitución forzada en otros países. Durante el año, la policía identificó también a seis mujeres y seis menores de edad en casos de explotación sexual interna. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la capacidad del gobierno para identificar y asistir a las víctimas de trata dentro del país, particularmente niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una institución gubernamental, reportó la identificación de 415 menores de edad ejerciendo la prostitución hasta septiembre de 2012.

Funcionarios señalaron que la falta de normas legales para el cuidado y protección de las víctimas siguió siendo un reto importante. El decreto de protección de las víctimas para asignar responsabilidad formal de servicios para las víctimas y para asignar fondos específicos, es requerido por la ley de trata de 2005 y se redactó por primera vez en 2008, sin embargo, aún no ha sido promulgado. Sin este decreto, el gobierno a nivel local carece de un presupuesto específico para servicios para las víctimas y una clara orientación para la identificación y asistencia de víctimas.

Algunos funcionarios locales señalaron que, en ausencia de este decreto, no tienen el mandato legal para brindar servicios dedicados a las víctimas de trata y no podían incluirlo en sus presupuestos.

La mayoría de servicios especializados para víctimas fueron financiados por organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. En noviembre de 2012, una organización no gubernamental abrió un refugio de emergencia específicamente destinado a adultos hombres y mujeres víctimas de trata en la capital, y el gobierno de Colombia proporcionó el equivalente a aproximadamente \$22.000 dólares en financiación para apoyar este refugio, el cual brindó asistencia a 11 víctimas referidas por funcionarios durante el año. El gobierno informó que proporcionó a una organización internacional el equivalente aproximado de un adicional de \$ 20.000 dólares en fondos para los servicios de emergencia a las víctimas, que se distribuyó en varias organizaciones no gubernamentales colombianas. Las autoridades reportaron seguir un plan nacional de asistencia a víctimas de trata para remitir a 38 víctimas identificadas a que recibieran servicios, e indicaron que ellos cumplieron con las necesidades de todas estas víctimas. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales, así como algunos funcionarios locales y las víctimas de la trata, afirmaron que la asistencia a víctimas financiado por el gobierno fue superficial y argumentaron que a veces las autoridades ponen a las víctimas en situación de inseguridad y riesgo, debido a las demoras burocráticas en la prestación de asistencia. Los gobiernos locales responsables de la prestación de servicios más allá de la atención de emergencia informaron que no tenían recursos específicos para ello. Servicios de reintegración, incluida asistencia para empleo, fueron prácticamente inexistentes. Los servicios para víctimas masculinas estuvieron muy limitados. El ICBF operó centros que prestaron servicios psicosociales, médicos y legales a los niños víctimas de violencia sexual e informó que hasta agosto

de 2012 ayudó a 415 niños que ejercían la prostitución, aunque no reportó el número de estas víctimas que recibieron refugio financiado por el gobierno durante el año. En asocio con una organización internacional, el gobierno asistió por lo menos a 483 niños reclutados por grupos armados ilegales y les proporcionó servicios de protección, salud, psicología y educación. Funcionarios consulares colombianos asistieron víctimas colombianas en el extranjero durante el período del informe, aunque en el pasado algunas de las víctimas fueron críticas de la ayuda que han recibido por parte del personal consular.

El gobierno invitó a las víctimas a ayudar en las investigaciones y judicializaciones de trata y 21 víctimas lo hicieron en 2012. Algunas de las víctimas, sin embargo, se mostraron reticentes a testificar contra los tratantes por temor a represalias o por falta de confianza en el gobierno. Hubo un programa limitado para brindar protección a las víctimas de delitos que testifican y 21 víctimas de trata participaron durante el año. No hubo informes de víctimas que hubieran sido encarceladas o penalizadas de otro modo, por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido objeto de trata. No existe ningún mecanismo jurídico especializado mediante el cual el gobierno hubiera ofrecido un visado o permiso de residencia temporal a las víctimas extranjeras de trata. Las autoridades reportaron que ellos podrían brindar a las víctimas extranjeras de trata un permiso temporal para permanecer en el país durante el proceso de investigación sobre las bases de caso por caso, sin embargo, las autoridades no identificaron víctimas extranjeras de trata en 2012.

Prevención

El gobierno mantuvo los esfuerzos de prevención durante el año. El Comité interinstitucional de lucha contra la trata siguió coordinando los esfuerzos del gobierno y sostuvo varios talleres para los funcionarios del gobierno, sobre el diseño

de políticas públicas. En asocio con una organización internacional, los 32 departamentos del país tuvieron comités anti-trata, a pesar de que mantienen distintos grados de actividad y que algunos actores de la sociedad civil señalaron que algunos existían sólo de nombre. A lo largo del año 27 departamentos elaboraron planes de acción locales contra la trata de personas, con la ayuda y orientación del Ministerio de Interior. El gobierno continuó financiando una línea telefónica gratuita anti-trata, operada por el Ministerio del Interior. Las autoridades informaron de la realización de actividades de concientización y de capacitación contra la trata de personas en asocio y con la disponibilidad del equivalente a cientos de miles de dólares para la financiación de las organizaciones internacionales. El Gobierno elaboró una estrategia nacional para la prevención de la explotación sexual de niños en el contexto de viajes y turismo y trabajó con la sociedad civil para certificar hoteles y establecimientos turísticos comprometidos en la lucha contra la explotación sexual de niños. No obstante, no se reportaron investigaciones, enjuiciamientos o condenas de personas involucradas en el delito de turismo sexual infantil durante el año.